

Boletín Oficial



DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA OFICIAL

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1887). Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este último caso con el Editor del Boletín.

PRECIOS DE SUSCRIPCION.—En Orense por trimestre siete pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, ocho pesetas.—Números sueltos treinta y ocho céntimos.

Se publica todos los días excepto los domingos.

Se suscribe en esta capital Imprenta y Librería de Gregorio Rionegro Lozano, Plazuela del Hierro núm. 3.—En las demás provincias en las principales librerías.

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (que Dios guarde) y Augusta Real Familia continúan en San Sebastian, sin novedad en su importante salud.

(Gaceta núm. 211.)

REAL DECRETO

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Palencia y el Juez de primera instancia de aquella capital, de los cuales resulta:

Que contratadas las obras de construcción de edificio para escuelas públicas de la villa de Cevico de la Torre, con D. Valentín Hernández Miguel, este para responder del cumplimiento de su contrato, constituyó fianza por valor de 1.325 pesetas:

Que en vista de una instancia que hizo Eleuterio Mena y López al Ayuntamiento de Cevico de la Torre para que se retirara al contratista D. Valentín Hernández la cantidad de 1.746 pesetas 63 céntimos que le adeudaba por jornales y obras de carpintería contratadas en las obras para las escuelas públicas de aquella villa, según constaba de la certificación del acto de conciliación que acompañaba la expresada Corporación municipal, en sesión de 7 de Octubre de 1888 acordó con

vista del art. 49 de las condiciones económicas del expediente que había servido de base para la ejecución de las obras de las escuelas públicas, que se hiciera la retención que solicitaba el Mena López, y si terminado el plazo de garantía que marcaba el art. 47 no existiera ninguna responsabilidad por parte del contratista, se devolviera al dicho Mena la cantidad que reclamaba o el depósito que liquidamente quedase fuera de responsabilidad:

Que promovidos autos ejecutivos en el Juzgado de Palencia por Doña Dolores Ortiz Elguea y D. Trinidad Larrea contra D. Valentín Hernández, se despachó mandamiento de ejecución contra los bienes de éste, para hacer efectivo el pago principal y costas, y designados por el acreedor los bienes en que había de efectuarse el embargo, fué la fianza constituida en arcas municipales del Ayuntamiento de Cevico de la Torre para responder de las obras que había ejecutado el Hernández, dictándose, en su virtud, por el Juzgado providencia en 30 de Noviembre de 1888, por la que se mandó que, hallándose el deudor Valentín Hernández Miguel comprendido en los artículos 1.444, 1.460 y 269 de la ley de Enjuiciamiento civil, se procediera a embargar las 1.325 pesetas, que según el otro del escrito a que se proveía, tenía el deudor dadas en fianza al Ayuntamiento de Cevico de la Torre, en garantía de las obras que ejecutó en dicho pueblo por no conocerse otros bienes para poder cubrir principal y costas, citándosele de remate, conforme a dicho art. 1.460, librándose exhorto al Juzgado de primera instancia de Baltanás, para que se sirviera ordenar se requiriese al Alcalde y Depositario de dicho Cevico de la Torre retuvieran como embargadas y a disposición de aquel Juzgado las 1.325 pesetas de fianza del deudor, que manifestasen en el acto del requerimiento en qué día cesaba la respon-

sabilidad de dicha fianza, para en su vista acordar lo que procediese en justicia:

Que hecho el embargo y requerimiento acordados por la Autoridad judicial, el Alcalde de Cevico de la Torre acudió al Gobernador de la provincia para que requiriera de inhibición a la judicial, y dicha Autoridad, de acuerdo con la Comisión provincial, dirigió oficio al Juzgado para que se sirviera acordar la reforma de la aludida providencia, en sentido de dejar libre y expedita la acción del Ayuntamiento para dar término al contrato de la construcción de sus escuelas, fundándose en que encomendada al Ayuntamiento la construcción de las escuelas de que se trata y celebrado el correspondiente contrato con D. Valentín Hernández Miguel, tenía por precisión que sufrir la fianza constituida en garantía del compromiso celebrado las consecuencias que se determinan en el art. 34 del Real decreto de 4 de Enero de 1885, y en los 65 y 66 del de 11 de Junio de 1886, sin que pudiera responder a otra clase de obligaciones, sea cualquiera la Autoridad que lo dispusiera; en que desde el momento en que la Autoridad judicial se mezcla en asunto que no le está cometido, decretando el embargo de la fianza con la que se habían de pagar los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado durante el desarrollo de las obras, así como los jornales y materiales empleados en estas, era indudable que se creía con derecho para decidir sobre la inteligencia, cumplimiento y efectos de un contrato administrativo, lo cual es contrario a los textos legales anteriormente citados, debiendo requerir la Administración para que se suspendiera todo conocimiento y dejase sin efecto su providencia de 30 de Noviembre de 1888, que conculcaba y vulneraba el derecho constituido, y venía a dejar sin efecto al art. 49 de las condiciones economi-

cas que sirvieron de base al contrato, y el acuerdo del Ayuntamiento de 7 de Octubre último, reteniendo el importe de la fianza para los jornales devengados por el carpintero Eleuterio Mena López; en que si el expresado contratista era en deber a Doña Dolores Ortiz y Doña Trinidad Fernández las cantidades que se le reclamaban, estas tan sólo habían de hacerse efectivas después que tuviera cumplido efecto lo que el art. 65 del Real decreto de 11 de Junio predicho establece, por cuya razón la providencia del Juzgado debió acomodarse al expresado precepto:

Que sustanciado el conflicto, el Juez dictó auto declarándose competente, alegando: que no existía base de competencia al solicitarse en el oficio la reforma de dichos proveídos, puesto que en su caso había debido reclamarse el conocimiento del asunto, que como en diferentes resoluciones tiene declarado el Consejo de Estado, las competencias deben proponerse y tramitarse con la ritualidad que establece el artículo del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que según los artículos 2.º y 3.º de dicho Real decreto puede el Gobernador reclamar el conocimiento de un negocio, pero jamás puede hacerlo para que se reforme una providencia, porque esto tiene su trámite en la ley procesal civil, y en su consecuencia, no habiendo materia de competencia, no podía aquél Juzgado declinar su jurisdicción, que aun en la hipótesis de que la reforma pudiese estimarse como defecto de forma, por tender el fondo de la comunicación a reclamar el conocimiento del asunto, tampoco podía dejarse expedita la jurisdicción por no ser el caso de los comprendidos en los artículos 34 y 65 del Real decreto de 11 de Junio de 1886, puesto que según el primer solo pueden embargarse los residuos de las certificaciones y la fianza, cuando hecha la recepción de las obras

no fuere necesario retener aquella para el cumplimiento de la contraria; y como el fundamento que el Ayuntamiento invoca no era la necesidad á que se refería el precitado artículo, de aquí el que su jurisdicción no hubiera sido invadida, y aun menos podía invocarse el 65, porque contra el contratista Hernández no existía reclamación de daños, ni más motivos que el que expresaba la certificación referida; que las fianzas, como las demás pagas de obras, es indudable que están afectas en primer término á las responsabilidades de la obra contratada, pero en manera alguna tenía prelación cuando no se reclamaba en vía administrativa, ni se atemperaba á sus disposiciones, y se optaba, por el contrario, por la vía judicial, y como la reclamación de Mena no se había hecho en primer término ante la Administración y sí ante la Autoridad judicial, celebrando acto de conciliación, no podía ampararse administrativamente en sus pretensiones; en que una vez que el Mena acudió á la jurisdicción ordinaria, sólo ésta podía ejecutar lo convenido en el acto de conciliación, sin que lo fuera lícito á dicho acreedor renunciar ya esta jurisdicción:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 5.º de la ley de 13 de Septiembre de 1888, que dispone continuarán, sin embargo atribuidas á la jurisdicción contencioso administrativo las cuestiones referentes al cumplimiento, inteligencia, rescisión y efecto de los contratos celebrados por la Administración central, provincial y municipal, para obras y servicios públicos de toda especie:

Considerando:

1.º Que la presente contienda de competencia se ha suscitado con motivo del embargo practicado por el Juez de primera instancia, en la fianza constituida por el contratista D. Valentín Hernández Miguel, para garantizar el cumplimiento del contrato celebrado con el Ayuntamiento de Cevico de la Torre para la construcción de un edificio destinado á escuelas públicas.

2.º Que si bien compete á la Administración todo lo que se refiere al cumplimiento, inteligencia y rescisión de los contratos celebrados para toda clase de servicios y obras públicas, y por lo tanto, el determinar las responsabilidades que como consecuencia de dichos contratos puedan afectar á la fianza que para garantía de los mismos se hubiere constituido, esto no obsta para que los Tribunales del fuero común puedan practicar embargo en aquella parte de la expresada fianza que hubiera de devolverse al contratista después de cubiertas las responsabilidades que afectan al contrato administrativo, las cuales sólo pueden ser determinadas por la Administración,

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración, sin perjuicio de las facultades que competen á la Autoridad judicial para practicar embargos en aquella parte de la fianza que hubiera de devolverse al contratista después de cubiertas todas las responsabilidades que nazcan del contrato administrativo.

Dado en Palacio á diez y ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

EXPOSICIÓN.

Señora: El Real decreto de 2 de Enero de 1880, por el que se dispuso la creación de la Junta de obras del puerto de Manila, determina que habrán de formar parte de la misma, en el concepto de Vocales, tres comerciantes importadores nombrados por el Gobernador general de Filipinas.

Creada con posterioridad á aquella la Cámara de Comercio de Manila, que es la Corporación oficialmente reconocida como representante de los intereses de dicho comercio, natural parece que análogamente á lo dispuesto en la Península para los puertos en que existan Juntas de obras de los mismos y Cámaras de Comercio, tenga representación en la Junta de obras del puerto de Manila aquella Cámara de Comercio lo que puede efectuarse desde luego sin inconveniente alguno y sin alterar su composición actual ni el número de sus Vocales, con solo disponer que los tres comerciantes nombrados por el Gobernador general que forman parte de dicha Junta, sean sustituidos por tres individuos de la Cámara de Comercio, dos de ellos de la clase de comerciantes y uno de la de industriales, nombrados por aquella superior Autoridad á propuesta de la citada Cámara.

Fundado en las razones expuestas, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 25 de Septiembre de 1889.—Señora: A L. R. P. de V. M.—Manuel Becerra.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Ultramar, en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en disponer:

Primero. En lo sucesivo formarán parte de la Junta de obras del puerto de Manila dos comerciantes y un industrial que sean individuos de la Cá-

mara de Comercio de dicha ciudad, los cuales serán nombrados por el Gobernador general de las islas Filipinas, á propuesta de dicha Cámara, y deberán sustituir en la Junta de obras del puerto á los tres Vocales de la clase de comerciantes que forman parte de la misma.

Segundo. En virtud de lo establecido en la prescripción anterior, la Junta de obras del puerto de Manila, se compondrá en lo sucesivo: del Gobernador civil de Manila, Presidente y Vocales, el Vicepresidente de la Junta de Agricultura, industria y Comercio; el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe de la provincia de Manila; el Capitán del puerto; el Comandante de Ingenieros de la plaza; el Administrador de la Aduana; tres individuos de la Cámara de Comercio de Manila, dos de ellos de la clase de comerciantes, y uno de la de industriales, nombrados por el Gobernador general, á propuesta de dicha Cámara; tres navieros nombrados por la misma Autoridad, y el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Director de las obras.

Tercero. El Gobernador general de las islas Filipinas adoptará las disposiciones consiguientes para que la Cámara de Comercio de Manila tenga inmediata representación en la Junta de Obras del puerto de dicha capital, en la forma prescrita en este decreto.

Dado en San Sebastián á veinticinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Ultramar, Manuel Becerra.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

EXPOSICIÓN

Señora: El Gobierno de V. M. olvidaría deberes elementales, si, pagando tributo á una ilegítima obstinación, tantas veces confundida con la noble perseverancia, cerrase los ojos á la realidad, sacrificando elevados intereses sociales en aras de la pasión política.

El Ministro que suscribe estima que si son lícitas sus preferencias de atención y de simpatía hacia el juicio por Jurados, y natural su empeño en contribuir al arraigo de esta transcendental reforma jurídica, no correspondería, pues, sinceramente su desconfianza, si por ventura la abrigase; pero el ensayo hecho hasta el día le permite servir á la verdad y al interés público con halago de sus personales convencimientos: el juicio por Jurados es un progreso definitivamente asegurado, merced á la prudencia de los partidos gobernantes, que no han de atender para defenderlo ó combatirlo á los antecedentes his-

tóricos, ni han de sentirse animados por espíritu sectario é intrasigente.

La publicidad es el ambiente vital de todos los organismos políticos y administrativos: la ortica de la opinión, encauzada por el conocimiento oficial de todos los datos necesarios para emitir juicios fundados constituye un inapreciable elemento de Gobierno. Informaciones anuales en que intervengan todos los Magistrados de lo criminal y cuyos resultados se publicarán por el Ministerio; la inserción en la Gaceta de estados trimestrales en que consten los datos más interesantes acerca de los veredictos, activa inspección del Ministerio público; circulares para solventar las dudas que en los Tribunales se ofrezcan; todo, en fin, cuanto del Gobierno dependa ha de llevarse á cabo para asegurar con asentimiento consciente de la Nación, no ya solo la vida y permanencia, sino la autoridad moral del Jurado, cuyo prestigio atañe á la sociedad, del seno de la cual emanan los Jueces de hecho.

Respondiendo á tales propósitos, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

San Sebastian veintitres de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve.—Señora: A L. R. P. de V. M., José Canalejas y Méndez.

REAL DECRETO.

Teniendo en cuenta las razones expuestas por el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con mi Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los Presidentes y Fiscales de las Audiencias territoriales y de lo criminal elevarán al Ministerio de Gracia y Justicia, dentro del mes de Enero de cada año, una Memoria nada acerca de la manera como funcionó el Tribunal del Jurado en el territorio de su jurisdicción durante el año anterior.

Art. 2.º En dicha Memoria manifestarán las dudas y dificultades que en la práctica hubiere ofrecido la aplicación de la ley de 20 de Abril de 1888 y la de juicio y por jurados, indicando las reformas que estimen con-

centes al arraigo de institución jurídica.

Art. 3.º Los Presidentes de las Audiencias oirán previamente á las respectivas Salas de justicia, agregando como apéndice á su Memoria certificaciones de los votos particulares que formulen los Magistrados que disientan de la opinión de la mayoría en alguno de los extremos que la Memoria comprenda.

Art. 4.º En dicha Memoria manifestarán los resultados obtenidos, acompañando todos los datos estadísticos necesarios al efecto.

Art. 5.º Los Fiscales de las Audiencias, independientemente de lo establecido en los artículos anteriores, dirigirán órdenes circulares á los Fiscales municipales sobre la formación de las listas de jurados, encareciéndoles la importancia que entrañan y la necesidad de que se formen no sólo en los plazos y con las formalidades establecidas por la ley, sino con personas imparciales é idóneas, sin incapacidad ni incompatibilidad de ningún género.

Art. 6.º Igualmente los Presidentes de las Audiencias cuidarán de que los Jueces municipales no olviden la obligación que les impone el art. 34 de la ley, y de que estos y los Jueces de instrucción cumplan con escrupulosidad y exactitud los demás deberes que á unos y otros impone la misma ley, resolviendo gubernativamente con espíritu de equidad y justicia, las quejas y reclamaciones que se les presenten, y corrigiendo en virtud de sus facultades disciplinarias las faltas y abusos que lleguen á su conocimiento.

Art. 7.º Tanto los Presidentes como los Fiscales elevarán al Ministerio de Gracia y Justicia, ó á la Fiscalía del Tribunal Supremo, según los casos, cuantas consultas consideren necesarias para la más fácil inteligencia y aplicación de la ley.

Art. 8.º El Ministerio de Gracia y Justicia examinará las Memorias y resumirá y publicará el resultado de todas ellas en la forma que mejor responda á la conveniencia del servicio, señalando y publicando en su caso íntegramente las que por la importancia de sus observaciones merezcan esta preferencia.

También se harán las oportunas anotaciones en los expedientes personales de aquellos funcionarios que se hayan distinguido por

su celo y competencia en el cumplimiento de tan importante servicio.

Dado en San Sebastian á veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve.—
Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, José Canalejas y Mendez.

AYUNTAMIENTOS

Laza.

Durante el término de ocho días hábiles, contados desde el siguiente al en que aparezca inserto este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, se hallará expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento el reparto extraordinario formado con el objeto de cubrir el déficit de los años económicos de 1888 y 89 á 1890.

Lo que se hace público por medio de dicho periódico para conocimiento de todos aquellos á quienes interese.

Laza 29 de Septiembre de 1889.—El Alcalde Presidente, José Pazos.

Providencias

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

D. Valentin Vilariño y Noguerol, Juez de instrucción de esta ciudad de Plasencia y su partido.

Por el presente, cito, llamo y emplazo á Candido Malvar-Eijar, hijo de Antonio y de Rafaela, natural y vecino de Gangues, de 23 años, soltero, jornalero, de estatura regular, color moreno, ojos y pelo castaño, sin barba, tiene un lunar en el carrillo izquierdo, y viste con chaqueta, chaleco y pantalón de paño y bufanda, y á José Iglesias, hijo natural de Juana, de padre desconocido, natural de Freije y vecino de Silvares, partido de Carballino, como el anterior, soltero, jornalero, de 23 años, de estatura buena, color moreno, pelo castaño, con bigote, y viste chaqueta de pana, faja negra, chaquetilla encarnada, pantalón negro y gorra; los que han estado trabajando en las obras del ferrocarril en la construcción de esta

ciudad, para que en el término de diez días á contar desde la inserción del presente en la Gaceta de Madrid y Boletines oficiales de esta provincia y de Orense, comparezcan en los extrados de este Juzgado á hacerles saber el auto de terminación de sumario en la causa que se sigue contra los mismos y otros por lesiones y á ser emplazados ante la Audiencia de esta ciudad, previniéndoles que de no verificarlo serán declarados rebeldes y les parará el perjuicio que haya lugar en derecho.

Al mismo tiempo reego y encargo á todas las autoridades civiles y militares y agentes de policía judicial procedan á la busca y detención de los expresados sujetos poniéndolos á mi disposición en las cárceles de este partido.

Dado en Plasencia á 30 de Septiembre de 1889.—Valentin Vilariño.—P. M. de S. S.ª José Calvo.

Don Julio Martinez Jimeno, Juez de instrucción del partido de Allariz.

Hago notorio: que para pago de derechos devengados por el Procurador de la ciudad de Orense D. Gonzalo Feijoo Rivera, en representación de Manuel Cid Gonzalez y su mujer Teresa Rodriguez vecinos del Veredo, y José Martinez Rodriguez, de Sotomayor, ambos en el Ayuntamiento de Laboadela, en causa por el delito de daños se le embargaron y sacan á pública subasta por segunda vez con la rebaja del veinticinco por cien los bienes siguientes:

Bienes de José Martinez Rodriguez.

1.º Un labradío cencenar al sitio do Cobo de dieciocho áreas ochenta y siete centiareas; linda al Este Francisco Salgado, Sur Rosa Biñero, Oeste camino y al Norte Camilo Losada; su valor quince pesetas.

2.º Un labradío y tounza baja al sitio de Viña, de diecisiete áreas ochenta y cinco centiareas; linda al Este camino, Oeste Manuel Alonso, Norte Rosa Faredes y al Sur de Antonio Pascual; y su valor cien pesetas.

3.º Un labradío ó Rego de cinco áreas cuarenta y seis centiareas; linda Este y Oeste Camilo Conde, al Norte Melchor Diaz y Sur Antonio Salgado; su valor treinta y cinco pesetas.

4.º Una casa hecha de madera, terrena y con la techumbre de paja, con su patio, cerrada de piedra, ocupa toda ciento cincuenta metros cuadrados, señalada con el número doscientos cuarenta y uno; linda Norte era, Sur y Oeste camino por donde tiene su entrada, Este terreno de Vicente Iglesias. Dentro de estas demarcaciones y en el patio hay otra casita terrena cubierta de teja curva; y vale todo lo deslindado 250

Bienes de Manuel Cid y su mujer Teresa Rodriguez, sitos en términos de la parroquia de San Jorge de la Touna.

1.º Una casa de alto y bajo con cuadra hacia el Norte y Oeste, sita en el término de Veredo, señalada con el número trescientos doce; ocupa todo ciento cincuenta metros cuadrados; linda al Norte Rosa Blanco, Sur camino de á pie á la fuente, Este la carretera y Oeste terreno de Inocencia Cid; su valor mil pesetas. 1.000

2.º Una huerta al sitio de Fonte de Arrilla, de dos áreas setenta y dos centiareas; linda Este y Oeste Manuel Rodriguez, Norte Rosa Gonzalez y Sur Pedro Cid; vale veinticinco pesetas. 25

3.º Otra huerta con majuelo de una area veinte centiareas; linda por el Norte Pedro Cid, Oeste Lucas Boo, al Norte Jose Menor y Sur Rosa Gonzalez; veinte pesetas su valor.

4.º Una tierra destinada á majuelo al sitio de Teuza Quemada, de una area y veinte centiareas; linda Este y Sur camino, Norte Ramon Salgado y Oeste Genaro Boo; su valor veinte pesetas.

5.º Un terreno al sitio do Oleiro, de cincuenta y dos centiareas; linda Norte

42

03

of

00

६

05

09

09

09

10

84

84

2

2

251

110

—115—

570

las

las

Madrid 27 de Junio de 1889.—El Direc-
tor general. Ramón Crós

DE LAS

INSTITUCIONES JURÍDICAS Y POLÍTICAS.

DE LOS PUEBLOS MODERNOS

DIRIGIDA POR LOS SEÑORES

1947

D. ALEJO GARCIA MORENO

PROSPECTO

Terminada la publicación de las

Siguiendo las indicaciones de la di-

Finalmente, para evitarmos a perda

Trazado á grandes rasgos el bosque

CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN

1.º En lo sucesivo se repartirá

2.º También se admiten suscri-

4. El pago de lo que se vaya...

La correspondencia se dirigirá

EBANISTERIA

CANDIDO, CERREDA

Progreso, 42, Orense

En este antropon y acreditado

Para comprobar esta verdad,

1944-1945